



EL COMERCIO DE EMISIONES

Selección de Artículos

**2 Cuando el dinero
crece en los árboles**

Por Oscar Reyes TNI

**6 Comercio de emisiones:
democracia contrarrestada**

Por Kevin Smith, Carbon Trade Watch/TNI

**9 Colombia: negocios de
secuestro de carbono,
territorios y comunidades**

Por Diego Alejandro Cardona Calle,
CENSAT - Amigos de la Tierra, Colombia

**12 México: puerta abierta
a plantaciones de árboles
“neoliberales”**

Por el Movimiento Mundial por
los Bosques Tropicales (WRM)

**13 ¡Justicia Climática ya!
Declaración de Durban sobre
el Comercio de Carbono**

GRUPO DE DURBAN POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Realizado para el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
Abril 2008

Cuando el dinero crece en los árboles

La deforestación es responsable de una quinta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono, es decir, más que todo el sector del transporte. A pesar de ello, un nuevo sistema mundial para 'reducir la deforestación' podría acabar recompensando a las empresas y los gobiernos que la estimulan.

En vísperas de la Conferencia sobre el Clima de la ONU, celebrada el pasado diciembre en Bali, el Gobierno indonesio anunció que plantaría 79 millones de árboles en un día para 'compensar' las emisiones generadas por el encuentro. Sin embargo, ese intento por batir un récord mundial no puede ocultar una estadística menos amable aparecida en el Libro Guinness 2008, que concedía al país el récord mundial en ritmo de deforestación. Entre 2000 y 2005, en Indonesia se destruyó un área equivalente a 300 campos de fútbol cada hora, factor clave por el que el país es el tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero, sólo detrás de los Estados Unidos y China.

Este elevado índice de emisiones refleja el hecho de que los bosques tropicales almacenen grandes cantidades de carbono y que su emisión a la atmósfera, a través de la deforestación, representa una quinta parte del total de emisiones anuales de dióxido de carbono. Para responder a este problema, durante la conferencia se aprobó una propuesta para 'reducir las emisiones provocadas por deforestación y degradación' (REDD) como componente de la 'hoja de ruta de Bali'.

El Banco Mundial y los bosques

La lógica sobre la que descansa la propuesta REDD es bastante simple. En estos momentos, las ganancias económicas a corto plazo que genera la deforestación superan a las ventajas a largo plazo que se derivan de conservar los bosques. Se cree que invirtiendo unos 100 mil millones de dólares anuales para proteger los bosques, la balanza económica se inclinaría a favor de la conservación de bosques. Este dinero se pagaría en forma de créditos de derechos de emisión, calculados en función de los índices nacionales de deforestación; cuantas más hectáreas conserve un país, más ganará.

La hoja de ruta de Bali no entra en demasiados detalles sobre cómo alcanzar este objetivo, pero al poner en manos del Banco Mundial la responsabilidad de administrar unos proyectos piloto para el programa REDD a través de su nuevo Fondo para reducir las emisiones mediante la protección de los bosques (FCPF), sentó una evidente base centrada en el mercado. Según Benoît Bosquet, el funcionario del Banco responsable de desarrollar este nuevo mecanismo: 'El objetivo final del FCPC es impulsar un mercado de emisiones con los bosques'. Al Banco no le falta experiencia en este terreno. 'Cuando el Banco presentó su primer Fondo Prototipo del Carbono, en 1999, éste estaba pensado como una herramienta de corto plazo para dar un primer empujón a la financiación privada en el mercado internacional de emisiones', explica Janet Redman, de la Red estadounidense Energía y Economía Sostenibles (SEEN). 'Ocho años después, la cartera del Banco se compone de más de diez fondos de este tipo, por un valor que supera los dos mil millones de dólares'.

Sin embargo, el Banco Mundial tiene un historial que deja bastante que desear en relación con los bosques. Durante los años ochenta, este organismo financió una serie de desastrosos proyectos de tala industrial, megapresas y construcción de carreteras que abrieron el camino hacia una deforestación incontrolada. Las crecientes críticas desembocaron, en 1991, en una nueva política forestal que, al menos sobre el papel, acababa con el apoyo del Banco a la tala comercial y ponía el acento sobre la conservación de los recursos y los derechos de los pueblos. Sin embargo, en la práctica, el Banco siguió incentivando la destrucción de bosques a través de sus programas de ajuste estructural. Pasado un tiempo prudencial, en 2002, emitió una política forestal revisada que marcaba su regreso a un papel más activo en el sector.

La retórica de la 'gestión forestal sostenible' no bastó para ocultar el hecho de que el Banco había vuelto a las andadas, promoviendo la tala de árboles y el crecimiento de plantaciones a expensas de las selvas vírgenes. A principios de 2007, por ejemplo, el Banco puso en marcha un plan estratégico para invertir en hasta siete millones de hectáreas de nuevas plantaciones industriales en Indonesia. Además, un informe interno presentado el pasado octubre señalaba que las actividades del Banco en la República Democrática del Congo desde 2002 habían fomentado la destrucción de los bosques por parte de empresas extranjeras y puesto en peligro los medios de vida - y por tanto la supervivencia - de en torno a medio millón de pigmeos congoleños. Los antecedentes del Banco en el Amazonas no son más halagüeños; la institución financia plantaciones de soja y actividades ganaderas en la zona, con lo que

exacerba la deforestación a gran escala.

El FCPF, que concibe los proyectos piloto REDD como un método para estimular el mercado internacional de créditos de derechos de emisión a partir de la 'deforestación reducida' se debería entender en este contexto; es decir, no tanto como una estrategia para proteger los bosques, sino más bien como una forma de hacer que el dinero crezca de los árboles.

Colgando un precio a los bosques

Un programa de este tipo está plagado de problemas, y las pruebas de los proyectos de comercio de emisiones ya en marcha demuestran por qué. Según el Informe Stern, presentado por el Gobierno británico en 2006, el cambio climático constituye 'el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo'; aún así, contra toda lógica, defiende que se amplíen los mercados de emisiones. Estos mercados adoptan la forma de lo que se conoce como comercio de derechos de emisión, un sistema que permite a los actores que contaminan pagar a otros para que rebajen sus emisiones y, así, no tener que reducir las ellos mismos.

La idea, integrada en el Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), es que los mercados de emisiones ofrecen un sistema eficaz para reducir las emisiones globales porque la mano oculta del mercado conducirá las inversiones hacia los recortes que sean más baratos. En la práctica, sin embargo, el MDL da carta blanca para seguir contaminando en el Norte, donde empresas y gobiernos tienen una opción barata para seguir con sus negocios, y en el Sur, donde los proyectos MDL que generan la mayoría de créditos garantizan subvenciones a algunas de las empresas más contaminantes del mundo.

Los proyectos REDD aplican un enfoque parecido al problema de la deforestación, y reducen una cuestión extremadamente compleja a un simple mecanismo mercantil que encaja con los modelos de los economistas más convencionales. 'La propuesta REDD simplifica la función de los ecosistemas forestales, como si sólo fueran un almacén de carbono', sostiene la organización Wahli, de Amigos de la Tierra Indonesia. Esta visión del problema subestima el papel de los bosques como zonas de captación de aguas, hábitats de biodiversidad y fuente de medios de vida para pueblos indígenas y comunidades forestales.

Se corre además el riesgo de que los programas para 'evitar la deforestación' se conviertan en otra herramienta para que los países ricos eludan las obligaciones que deberían asumir por su consumo excesivo y por no reducir las emisiones. 'El debate sobre REDD propicia que el acento pase del comportamiento del Norte a lo que está sucediendo en el Sur, lo cual resulta políticamente más aceptable para los país industrializados', comenta Jutta Kill, de la red europea sobre recursos forestales FERN.

Pero el carbono almacenado en los bosques no sería equivalente al dióxido de carbono que se libera con la quema de combustibles fósiles. 'El carbono de los bosques se libera a la atmósfera en determinado momento, como parte de todo un ciclo natural, mientras que la emisión de dióxido de carbono fósil sólo funciona en una dirección', explica Jutta Kill. En el caso de las plantaciones industriales de árboles, esta capacidad de 'almacenamiento' es muy breve, ya que el sistema funciona plantando árboles de crecimiento rápido como el eucalipto, que se tala

después de entre ocho y 15 años. Por este motivo, entre otros, la propuesta de que las plantaciones forestales se incluyan como 'sumideros' de carbono en el marco del MDL resultó muy polémica cuando se empezó a negociar el Protocolo de Kioto.

REDD: alerta roja

Cuando se aprobó el Protocolo de Kioto, las medidas para proteger los bosques vírgenes quedaron excluidas del MDL con el pretexto de que las inversiones en proyectos de deforestación en una zona desplazarían el problema a otras áreas. Los programas REDD que se están discutiendo ahora intentan abordar esta cuestión solicitando que la deforestación se reduzca por países y no por proyectos, lo cual dará pie a toda una serie de nuevos problemas.

'En muchos países tropicales, los Estados (...) definen legalmente las selvas restantes como "tierras estatales"', explica Tom Griffiths, del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP). Esto les permite ignorar por completo las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. Con la propuesta REDD, en que los pagos serían administrados de forma verticalista - por el Gobierno, las empresas y las ONG conservacionistas-, "el riesgo está en que los pueblos que dependen de los bosques sean desalojados para 'proteger unas "reservas" de carbono forestal muy lucrativas'.

Los verdaderos impulsores de la deforestación

Este enfoque apunta a pueblos indígenas y marginados como 'impulsores' de la deforestación. En la península de Kampar, en la provincia indonesia de Riau - donde, además de una rica biodiversidad y de una especie amenazada como el tigre

de Sumatra, se encuentra una de las mayores turberas del mundo la empresa papelera APRIL ha propuesto plantar un 'anillo' de árboles para proteger los bosques de la tala ilegal. En estos momentos, está buscando financiación para el proyecto a través del programa REDD.

Sin embargo, el proyecto despejaría directamente casi la mitad de la cubierta forestal restante en la región, y no haría nada para abordar el principal problema de la deforestación en la zona: la sobrecapacidad de las fábricas de papel de APRIL y de la empresa rival, APP. Las dos compañías, en total, procesan más de cuatro millones de toneladas de pasta de papel al año, la mayor parte del cual es fruto de la deforestación de los bosques vírgenes de la región y se exporta al Norte como pasta o como papel.

Pero el problema no sólo se limita a la provincia de Riau. En gran parte de Indonesia, las exigencias de la industria maderera se están viendo exacerbadas por la expansión de las plantaciones de palma aceitera. El Gobierno indonesio ya ha otorgado concesiones para la tala y el desarrollo de plantaciones en más de 60 millones de hectáreas (un territorio equivalente al Reino Unido y Japón juntos). El aceite de palma se utiliza en toda una serie de alimentos y productos cosméticos con destino a Europa, entre los que se incluirían marcas tan conocidas como Kit-Kat, Pringles, la margarina Flora y el champú H&S. La expansión de estas plantaciones de palma aceitera está siendo alimentada por el creciente comercio de agrocombustibles, estimulado por los objetivos y los subsidios de la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de 'biocarburantes'. La propuesta REDD, por tanto, no hace nada para frenar a los ver-

daderos impulsores de la deforestación.

¿Qué alternativas?

Entonces, ¿dónde estaría la solución? No hay respuestas sencillas, pero los activistas de Riau y del resto de Indonesia reivindican que se imponga una moratoria sobre la tala en las turberas del país, así como la reestructuración nacional de las industrias papeleras. 'Hay muchos factores que estimulan la deforestación, como el comercio internacional de soja y papel, y los objetivos de biocombustibles de la Unión Europea', señala Jutta Kill. 'Habría que empezar por encarar esos factores antes de lanzar dinero a las empresas que están cortando árboles, ya que así les damos incentivos para que sigan haciéndolo'.

De hecho, los incentivos económicos podrían desempeñar un papel importante, siempre que vayan acompañados del reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y de proyectos educativos. Estas medidas, que costarían mucho menos que la financiación propuesta para el proyecto REDD, podrían funcionar realmente para evitar la deforestación. Pero es improbable que aparezcan en los libros contables de un programa de comercio de emisiones cuyo principal objetivo parece ser ofrecer a los países del Norte otra vía para eludir su obligación de rebajar las emisiones en origen.

Artículo publicado el 22 de febrero de 2008 en el Instituto Transnacional por Oscar Reyes, encargado de comunicaciones del Instituto Transnacional y editor de la revista Red Pepper

www.tni.org

www.redpepper.org.uk

Comercio de emisiones: democracia contrarrestada

La política de compensación de emisiones contaminantes, nos aleja de las medidas a largo plazo necesarias hacia una economía limpia que pueda luchar de forma efectiva contra el cambio climático.

El sistema de comercio de emisiones y compensaciones distrae la atención de los cambios sistémicos y las acciones políticas colectivas que se deben emprender en la transición hacia una economía más limpia. Promover un enfoque más efectivo con respecto al cambio climático implica alejarse del dogma miope y reduccionista del libre mercado, de los falsos arreglos económicos y de los intereses a corto plazo de las grandes empresas.

La lógica sobre la que descansa todo el sistema del mercado de emisiones y de compensaciones nos dice que una tonelada de dióxido de carbono aquí es exactamente lo mismo que una tonelada de dióxido de carbono allá. Es decir, que si es más barato reducir las emisiones en la India que en el Reino Unido, se pueden lograr las mismas mejoras climáticas, pero de forma más rentable, reduciendo las emisiones en la India.

Sin embargo, la atractiva simplicidad de esta lógica sólo se explica si se hace caso omiso de toda una serie de importantes cuestiones –derechos territoriales, desigualdades Norte-Sur, luchas locales, poder de las grandes empresas o historia colonial– y todo se limita a una simple cuestión de rentabilidad económica.

Los mecanismos de comercio de emisiones y de compensaciones representan un enfoque reduccionista del cambio climático, un enfoque que niega unas variables muy complejas y que prioriza la rentabilidad por encima de todo.

Así, cuando la organización holandesa FACE Foundation planta árboles en el parque nacional de Kibale, en Uganda, para compensar las emisiones de los vuelos comerciales, está ignorando el hecho de que estas tierras han sido escenario de violentos desalojos en un pasado no muy lejano, y que éste sigue siendo un territorio reivindicado por comunidades que vivían en él.

Cuando las empresas compran créditos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, lo único que importa es lo baratas que resulten las supuestas reducciones que han generado dichos créditos. Pero toda compensación en los países del Sur que busque justificar las emisiones en el Norte evita por completo el problema de la extrema diferencia en los niveles de consumo de dióxido de carbono per cápita, y da por supuesto que la reducción de emisiones en el Sur se puede tratar como cualquier otra mercancía colonial.

Lógica mercantil

Incluso siguiendo la lógica estrictamente mercantil, obsesionada con la rentabilidad, el mecanismo del mercado de emisiones y compensaciones desafía todo sentido común. El objetivo del sistema es el de ofrecer a las empresas del Norte diferentes salidas para aplazar la costosa transición hacia tecnologías bajas en emisiones.

Se trata de algo, en efecto, 'rentable' a corto plazo, ya que es más fácil y más

barato comprar créditos de derechos de emisión que asumir la compleja tarea de realizar dicha transición, aunque cada vez son más los estudios que indican que cuanto más se aplacen los cambios, más caro y complicado será realizarlos. Llegado el momento, tanto porque la sociedad depende cada vez más de combustibles fósiles como por el mayor coste que entrañará adaptarse a los impactos exacerbados del cambio climático.

Sistema de compensaciones para evitar responsabilidades

Abunda ya la documentación sobre cómo los países pueden usar el sistema de compensaciones para evitar las responsabilidades asumidas con respecto a los objetivos de Kyoto, y sobre cómo empresas insostenibles por naturaleza –como Land Rover, British Petroleum y British Airways– pueden utilizar este mecanismo para ganarse una legitimidad ecológica que no se merecen. Uno de los hechos más inquietantes está en cómo el sector empresarial está echando mano de la creatividad con el sistema de compensaciones para seguir ampliando su agenda.

La corrosiva influencia de la ilógica lógica de las compensaciones ni siquiera se limita ya al ámbito del cambio climático y de las emisiones de dióxido de carbono. Coca Cola ha sido objeto de largas campañas organizadas por grupos que luchan por la justicia social en todo el mundo, pero sus prácticas en la India han suscitado una especial atención.

En 2003, el Centre for Science and the Environment, un instituto de investigación de Delhi, publicó un informe basado en ensayos de laboratorio que demostraba unos niveles de pesticidas e insecticidas

entre once y setenta veces superiores a los máximos fijados por la UE para agua potable en toda una serie de refrescos comercializados por Coca Cola en la India.

El India Resource Centre, institución con sede en los Estados Unidos, ha emitido varias acusaciones contra la empresa, afirmando que es responsable de la importante falta de agua de muchas comunidades, y que sus plantas embotelladoras contaminan los terrenos y las aguas colindantes. En marzo de 2004, las autoridades de Kerala, un estado al sur de la India, clausuraron una de las plantas embotelladoras de Coca Cola, acusada por comunidades y activistas de la zona de haber agotado y contaminado sus recursos hídricos.

¿Verdadero reciclaje?

En agosto de 2007, mientras bebía de una lata de Coca Cola Light frente al característico panda del logo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el presidente de Coca Cola, Neville Isdell, anunciaba que la empresa destinaría 20 millones de dólares a un programa de colaboración con WWF para “suplir cada gota de agua que utilizamos en nuestros refrescos y en su producción”. Además de reducir y reciclar el agua utilizada, el programa pretendía reabastecer recursos hídricos.

Este reabastecimiento no se producirá en los lugares en que se estaba utilizando y agotando el agua, sino que se realizaría a través de diversos proyectos ejecutados en otras partes del mundo. Estamos hablando, en realidad, de un sistema de compensaciones con el agua.

Estos 20 millones de dólares (que representan menos del 1% del enorme pre-

supuesto para publicidad de Coca Cola, unos 2.400 millones de dólares anuales) se están utilizando para contrarrestar toda la publicidad negativa que recibe Coca Cola por sus prácticas en la India, que agotan y contaminan las aguas. La empresa ha mantenido una enérgica campaña para denegar toda responsabilidad sobre las catastróficas consecuencias que han sufrido estas comunidades, de manera que, utilizando este sistema de compensaciones hídricas, puede jugar a ser la empresa buena de la película en otras zonas del mundo sin siquiera tener que reconocer los daños que ha provocado en otras.

Las posibilidades del sistema de compensaciones hídricas no sólo se limitan a actos concretos que sirvan para limpiar la imagen de las empresas. Algunos comentaristas como John Regan, proveedor de créditos de derechos de emisión de Chicago Climate Exchange, un programa para la comercialización de gases de efecto invernadero, considera que el programa de Coca Cola es un “indicio alentador de la incipiente necesidad de un régimen de comercio de créditos de agua”. La idea es que si una empresa no ha controlado lo suficiente la contaminación de las aguas en determinado lugar, deberá comprar créditos a otra empresa que sí haya controlado esa contaminación por encima de los objetivos que se le han fijado.

Al igual que sucede con el comercio de emisiones, un sistema de este tipo daría pie a toda una serie de oscuros trámites contables y operaciones para dar la impresión de que la industria se está movilizándose en el terreno ecológico, y ocultar el hecho de que, en realidad, se está haciendo muy poco para abordar las cues-

tiones fundamentales de degradación medioambiental e injusticia social.

Son muchos los programas que se han propuesto o se están desarrollando para mercantilizar y comercializar problemas medioambientales, como el comercio de residuos, de especies en vías de extinción y de humedales. Lo irónico es que es precisamente la continua expansión de las economías de mercado la que ha creado esa tremenda presión sobre los recursos naturales y la que amenaza a todo tipo de ecosistemas con sus crecientes niveles de contaminación industrial.

Ahora, esas mismas fuerzas mercantiles se están presentando como la panacea para nuestros muchos males ecológicos. Esta agenda de mercantilización tiene poco que ver con los intereses públicos; se trata más bien de permitir a las industrias que aumenten su capital con las transacciones de estos nuevos mercados. Lo que se defiende como una solución más barata para que la industria cumpla con las normativas medioambientales transforma una cuestión social y política en una cuestión mercantil, institucionalizando, de hecho, un sistema injusto y antidemocrático.

Si debemos luchar adecuadamente contra el cambio climático, debemos desarrollar y aplicar un análisis sistémico que vaya más allá de la obsesión con los costos o con el dióxido de carbono, y fomentar sinergias con otras luchas fundamentales en materia de comercio, finanzas, derechos humanos, biodiversidad, justicia medioambiental y democracia.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2008 en Diagonal por Kevin Smith, miembro de Carbon Trade Watch, Instituto Transnacional
www.carbontradewatch.org

Colombia: negocios de secuestro de carbono, territorios y comunidades

Los sumideros de carbono que forman parte de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio propuestos para combatir el cambio climático requieren grandes extensiones de tierra que en muchas ocasiones generan importantes conflictos sobre la propiedad y el acceso a recursos.

Pocos días atrás culminó la décima segunda sesión de la conferencia de las partes sobre Cambio Climático –COP 12-, con cuyo cierre se confirmó, una vez, más la escasa voluntad de los gobiernos y partes involucradas en buscar soluciones contundentes a la crisis climática a la cual estamos asistiendo. Lo que sí se evidenció fue el interés por promover el uso de las estrategias inventadas para solucionar la problemática climática, es decir aquellas basadas en mecanismos de mercado, destacándose en este grupo los proyectos de plantaciones forestales como sumideros de gases de efecto invernadero.

Entre los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL-, los supuestos sumideros representados en las plantaciones forestales llaman ampliamente la atención de los agentes contaminadores de los países industrializados, entre otras razones porque permiten sostener el modelo causante de la crisis climática, son posibles de realizar en países empobrecidos a costos significativamente menores de lo que valdría en sus países y finalmente representan una fuente más de riqueza.

Pero toda esa suerte de proyectos requiere, como es apenas lógico, de grandes extensiones de tierra para ser llevados a cabo, tierras que hoy en día permanecen en gran porcentaje en manos de los pueblos indígenas, negros y campesinos del mundo, que a su vez se convierten en un obstáculo para los planes de expansión de los monocultivos.

Mientras en la COP se habla de la vulnerabilidad y el fondo de adaptación al cambio climático, debería tal vez pensarse en la alta vulnerabilidad de las comunidades locales a los proyectos en mención que como veremos más adelante ya comienzan a impactar de forma negativa territorios y comunidades.

El caso colombiano no es ajeno a esta realidad, lo cual puede inferirse en las declaraciones de miembros de la delegación oficial, quienes manifestaron estar participando de la COP motivados por la posibilidad de acceder a los recursos que puedan derivarse de los negocios del MDL.

El gobierno colombiano cuenta con una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; en dicha oficina se encuentran registrados los proyectos forestales aprobados como MDL, es decir sumideros de carbono, los cuales a la fecha suman 8 aun cuando se deben contabilizar como 12 puesto que uno de ellos denominado Proyecto Forestal Nacional comprende 5 zonas del país.

La ejecución de estos 12 proyectos supone el uso de 222.885 ha, lo que representaría un incremento aproximado de 150% en el área ocupada por plantaciones en el país; sin embargo, esta cifra puede ser muy superior si tenemos

en cuenta que uno solo de los proyectos plantea el uso de más de 100.000 ha sin que se tenga precisión acerca del área a ocupar. Como es de esperarse, el mayor porcentaje de especies a emplear corresponde a exóticas, tales como pinos, eucalipto, teca, melina y acacias.

A la fecha, únicamente dos de estos proyectos se encuentran en etapa de desarrollo en campo, permitiendo la evaluación parcial de uno de ellos y la identificación de visibles irregularidades y/o aspectos preocupantes (como ejemplo, más adelante se describirá la forma en la cual varios de estos proyectos se pretenden establecer dentro de territorios colectivos de comunidades indígenas).

Si observamos con mayor detenimiento uno de los proyectos en ejecución desde 2002, denominado Procuencia, tenemos que para abril de 2006 contaba con 3.200 ha de plantaciones establecidas, 60% correspondiente a pinos y eucaliptos. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Hagamos mención de los “contratos de cuentas en participación”, figura mediante la cual el proyecto involucra a los propietarios para que éstos pongan las tierras en las cuales se establecen las plantaciones y se les otorga un préstamo destinado a la reforestación comercial, dinero procedente de Certificado de Incentivo Forestal -CIF.

Lo anterior significa que el establecimiento de las plantaciones está siendo financiado con recursos del Estado colombiano, pero paralelamente lo hará con recursos provenientes de la venta de bonos de reducción de emisiones dentro del marco del MDL; en tal sentido, este proyecto es uno de los más avanzados, si no el más, en la negociación de bonos en el país.

Respecto a estos dineros, los propietarios tienen claridad en cómo se distribuyen finalmente los recursos provenientes del CIF destinados a cubrir parte de la deuda adquirida, sin embargo no manejan ninguna información sobre cómo se distribuirán los recursos provenientes de los bonos de carbono, los que llegarán a manos del proyecto y no directamente de los ejecutores.

De otra parte, entre los actores involucrados en este sumidero aparecen aquellos identificados en el marco internacional como agentes con claros intereses en el negocio y el mercado de carbono; para citar algunos, además de los consultores particulares, tenemos a la FAO, que ha sido llamada a cumplir con las funciones de administración y asistencia técnica en aras de dar transparencia al proyecto; por otra parte, aparecen las grandes ONGs como Conservación Internacional (CI), encargada del componente de adicionalidad representada en el diseño de corredores biológicos. Al mismo tiempo, esta organización y el Banco Mundial se vislumbran como los dos principales clientes para la venta de los bonos en el mercado de los MDL.

Pasando ahora a los proyectos en espera de comenzar su ejecución, encontramos el correspondiente al Parque Nacional Natural Paramillo, donde de entrada debe cuestionarse la realización de una actividad forestal productiva dentro de un territorio cuyos usos están tácitamente restringidos a la investigación, la educación ambiental y la recreación pasiva. El objetivo presentado en este caso es el establecimiento de plantaciones forestales como estrategia para generar alternativas económicas para pequeños propietarios, garantizar la protección del parque nacio-

nal y fortalecer la conservación, lo cual es absurdo de concebir al sopesar este objetivo con los impactos generados por las plantaciones forestales, su manejo, aprovechamiento y en general por el modelo al cual están sujetas.

Por último, se tienen los proyectos diseñados para establecerse en territorios de comunidades indígenas. Uno de ellos se encuentra en la zona plana del departamento de Córdoba, el mismo donde se ubica el del Parque Paramillo; en éste el objetivo es el establecimiento de 1.500 ha de plantaciones para generar beneficios económicos para las comunidades indígenas, debemos suponer pertenecientes al pueblo Zenú que habita esta región.

El otro proyecto llamado Renacimiento de la Orinoquía pretende establecer más de 100.000 ha de plantaciones de palma aceitera, pino, eucalipto, caucho y acacias, entre otras especies, en los llanos orientales, específicamente en el departamento de Vichada; con el supuesto objetivo de generar alternativas económicas para la población indígena local. Lo primero que llama la atención aquí es el uso de territorios pertenecientes a comunidades indígenas; involucra las áreas de Marandua, Carimagua, Cimarron y el resguardo Wacoyo.

Otro asunto es la falta de especificidad del área a utilizar, puesto que para esta misma zona se presentó hace unos meses ante la Unión Europea la propuesta de crear allí el más grande sumidero de carbono del planeta, 3 millones de ha. Tal labor estuvo a cargo de Carlos Gustavo Cano, actual miembro de la junta directiva del Banco de la República, pero otrora ministro de agricultura encargado de presentar la actual ley forestal ante el

Congreso, la misma que eliminó todo el control que existía para el establecimiento y manejo de plantaciones y facilitó la inversión de capital privada en la explotación de las selvas colombianas.

Los dos últimos proyectos representan una serie de amenazas para los territorios y las comunidades indígenas del país. En primera medida está el escenario creado por la ley forestal, la cual eliminó el requisito de solicitar permiso para el establecimiento de plantaciones, limitándolo sólo al registro de las mismas, lo que significa que ahora no se hace revisión si los monocultivos se superponen con territorios colectivos, zonas de protección o conservación, condiciones que imposibilitarían estos proyectos. Lo mismo sucede con el tema de aprovechamiento y manejo de las plantaciones.

Por otra parte, se tiene la violación al legítimo derecho de las comunidades indígenas a la "Consulta Previa", lo cual se logra durante el presente gobierno mediante la creación de una nueva reglamentación que limita la consulta a proyectos que requieran "Licencias Ambientales", lo cual como acabamos de ver fue eliminado para el caso de las plantaciones por la ley forestal. De esta forma, las comunidades no tienen la posibilidad de decidir sobre las actividades pensadas por terceros para instalar en sus territorios, con los impactos venideros que ya hemos descrito.

Artículo publicado en diciembre de 2006 en el Boletín N° 113 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) por Diego Alejandro Cardona Calle, miembro del grupo CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, correo electrónico: bosques@censat.org

www.wrm.org.uy

México: puerta abierta a plantaciones de árboles “neoliberales”

Las plantaciones de eucalipto amenazan en convertirse en el nuevo modelo de negocio del libre mercado, aprovechando el espacio abierto por el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto

México está integrado a un modelo que prioriza las necesidades de la demanda del capital industrial transnacional orientado a la exportación. A esa demanda se subordina la política ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos (ver Boletín 14 del WRM).

Dentro de ese esquema entra la plantación de miles de hectáreas de árboles celulósicos como el eucalipto, de especies de rápido crecimiento como la teca, melina, pawlonia, cedro rosado. Según palabras del director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Alberto Cárdenas Jiménez, resultan muy “positivos” los cambios realizados por el congreso a la Ley Forestal el pasado mes de diciembre pues “El asunto de las plantaciones quedó desregulado a su máxima expresión”. Eso quiere decir que se abrirán aún más las puertas para el ingreso masivo del “perfecto árbol neoliberal”, el eucalipto, al decir de Jaime Avilés, columnista del diario mexicano La Jornada, porque crece rápido, mata todo lo que está a su alrededor y genera grandes ganancias para muy poca gente.

El Plan Puebla Panamá (PPP), que busca convertir a México y Centroamérica en una gran zona de libre comercio, con

incontables maquiladoras y “canales de tierra” para incrementar el comercio interoceánico, tiene como uno de sus componentes la plantación a gran escala de monocultivos de ese tipo de árbol. Algunas de esas plantaciones serán proveedoras de madera y celulosa. Otras tal vez sirvan de “sumideros de carbono”, un truco más de las transnacionales para evitar reducir las emisiones de gases contaminantes de los automóviles y grandes industrias en los llamados países desarrollados, que han provocado el calentamiento de la atmósfera.

Como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, los sumideros de carbono dan carta blanca a países e industrias para seguir contaminando, siempre y cuando financien proyectos “ecológicos” en el Tercer Mundo que supuestamente compensen la contaminación creada. Entre esos proyectos se incluye la plantación de árboles. Alguno podría pensar: ¿Qué problema puede haber con eso? ¿Acaso los ecologistas no se la pasan despotricando para que se siembren árboles? El WRM ha explicitado largamente la gran diferencia que existe entre los bosques y las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, que presentan los mismos problemas ecológicos que los monocultivos agrícolas.

Dice el profesor Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que las plantaciones forestales industriales “en realidad no son los complejos ecosistemas que nombramos genéricamente como bosques sino monocultivos estrictos emplazados sobre gigantescas áreas productivas (de varias decenas de miles de hectáreas) que vienen asociadas a la necesaria expulsión de la población

rural, al desempleo que se refuerza con la mecanización de la producción forestal, al empleo intensivo de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc., al desarrollo de plagas, al agotamiento y contaminación de los mantos freáticos, a la destrucción de la biodiversidad”. Con los sumideros de carbono, “se introducen directamente empresas transnacionales en los procesos comunitarios de gestión de los bosques. Se involucra a las comunidades dentro de una gran manipulación de escala mundial según la cual son las mismas empresas transnacionales que contaminan y que más amenazan con seguirlo haciendo, sin resolver ninguna de las causas reales del calentamiento atmosférico, las que justamente se visiten de hadas madrinas para el apoyo de las depauperadas comunidades campesinas”.

En el actual proceso de privatización de las riquezas biológicas, las transnacionales se instalan peligrosamente en zonas clave de los corredores biológicos. Es así que otro componente ambiental del Plan Puebla Panamá lo constituye el Corredor Biológico Mesoamericano, que vinculará cientos de áreas naturales protegidas en la región para formar una sola zona de conservación. Grupos de la sociedad civil, ecologistas e indígenas denuncian el Corredor como una maniobra de relaciones públicas para legitimar el Plan Puebla Panamá ante el sector ambientalista.

Artículo publicado en febrero de 2003, en el Boletín N° 67 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), basado en información obtenida de: “Los árboles neoliberales” por Carmelo Ruiz Marrero y “Programas forestales, sin recursos: Alberto Cárdenas” una entrevista de Lourdes Edith Rudiño a Alberto Cárdenas

www.wrm.org.uy

¡Justicia Climática ya!

Declaración de Durban sobre el Comercio de Carbono

Como representantes de movimientos populares y organizaciones independientes rechazamos la afirmación de que el comercio de carbono detendrá la crisis climática. La causa principal de esta crisis radica en la explotación de los combustibles fósiles y la liberación del carbono que contienen en océanos, atmósfera, suelos y seres vivos. Hoy, esta quema excesiva de combustibles fósiles pone en riesgo la capacidad de la Tierra de mantener un clima habitable.

Los gobiernos, las agencias de crédito a la exportación, las corporaciones y las instituciones financieras internacionales siguen apoyando y financiando la exploración y extracción de combustibles fósiles y otras actividades que incrementan el calentamiento global, como la degradación y destrucción a gran escala de bosques, mientras dedican sumas irrisorias a la energía renovable. Resulta particularmente perturbador que el Banco Mundial haya desafiado recientemente la recomendación de su propia Revisión

de Industrias Extractivas, que demanda la eliminación progresiva del financiamiento del Banco a la extracción de carbón, petróleo y gas.

Denunciamos los intentos de las corporaciones, los gobiernos y las Naciones Unidas para construir un “mercado del carbono”, que incluye la comercialización de “sumideros de carbono”, que retrasan aún más el fin de la extracción de combustibles fósiles.

La historia ha sido testigo de intentos de mercantilizar la tierra, los alimentos, el trabajo, los bosques, el agua, los genes y las ideas. El comercio del carbono sigue los pasos de esa historia y transforma la capacidad de reciclar carbono de la Tierra en un bien objeto de compra y venta en el mercado mundial.

En el proceso de creación de esta nueva mercancía —el carbono— la facultad y la capacidad de la Tierra de sostener un clima que haga posible la vida y las sociedades humanas están pasando a manos de las mismas corporaciones que destruyen el clima.

Es necesario que las personas en todo el mundo tomen conciencia de este proceso de mercantilización y privatización, e intervengan activamente para asegurar la protección del clima de la Tierra.

El comercio del carbono no contribuirá a lograr la protección del clima del planeta. Es una solución falsa que reafirma y magnifica las desigualdades sociales de varias formas:

- El mercado del carbono crea derechos transferibles para verter carbono en la atmósfera, los océanos, el suelo y la vegetación, en cantidades que superan con exceso la capacidad de estos sistemas para almacenarlo. Por concepto de estos derechos, se adjudicarán miles de millones de dólares sin cargo alguno a las grandes corporaciones de energía eléctrica, siderurgia, cemento, celulosa y papel y otros sectores, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero en las naciones industrializadas, que han sido las causantes de la crisis climática y que ya explotan al máximo estos sistemas. Los costos de las futuras

reducciones en el uso de combustibles fósiles probablemente recaerán en forma desproporcionada sobre el sector público, las comunidades, los pueblos indígenas y los contribuyentes individuales.

- El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, así como muchos esquemas de comercio de carbono del sector privado, alientan a los países industrializados y a sus corporaciones a financiar o crear sumideros de carbono baratos, tales como las plantaciones de árboles a gran escala en el sur, como una alternativa lucrativa a la reducción de emisiones en el norte. Otros proyectos MDL, como los programas de reducción de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), se focalizan en tecnologías que apuntan a reducir la contaminación y por ende no hacen nada por reducir los impactos de las industrias de combustibles fósiles sobre las comunidades locales. Además, la dimensión de esos proyectos contrasta radicalmente con el porte ínfimo de los proyectos de energía renovable, que apenas sirven como decoración de desarrollo sustentable para el MDL.

- Los pequeños estados insulares, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los pescadores artesanales, las mujeres, los jóvenes, los pobres, los viejos y las comunidades marginalizadas ya están sufriendo en forma desproporcionada los impactos de las industrias de combustibles fósiles y otras industrias generadoras de gases de efecto invernadero: desplazamientos, contaminación o cambio climático. Los proyectos MDL intensifican estos impactos de muchas maneras. En primer lugar, habilitan que se siga con la búsqueda, extracción, refinación y quema de combustibles fósiles. Segundo,

al otorgar financiación a proyectos del sector privado, como las plantaciones industriales de árboles, permiten que éstos se apropien de tierra, agua y aire - que ya son sostén de la vida y formas de sustento de las comunidades locales- para dedicarlos a nuevos sumideros de carbono para las industrias del norte.

- La negativa a eliminar progresivamente el uso del carbón, el petróleo y el gas, que se reafirma con el comercio de carbono, también es causa de un número creciente de conflictos militares en distintas partes del mundo, que aumentan la injusticia social y ambiental. Esto, a su vez, determina el desvío de grandes recursos hacia los presupuestos militares, que de lo contrario podrían dedicarse a respaldar economías basadas en las energías renovables y la eficiencia energética.

Además de generar estas injusticias, las debilidades y contradicciones internas del comercio de carbono hacen más probable que, en los hechos, en vez de “mitigar” el calentamiento global, lo empeore. No es posible, por ejemplo, verificar que los proyectos del MDL estén “neutralizando” ninguna cantidad determinada de extracción y quema de combustibles fósiles. La afirmación de que sí pueden hacerlo resulta cada vez más peligrosa, porque crea la ilusión de que es posible mantener los patrones de consumo y producción, en particular en el norte, sin afectar el clima.

Por otra parte, debido al problema de la verificación y la falta de una regulación creíble, nadie en el mercado del MDL puede saber a ciencia cierta qué está comprando. En ausencia de una mercancía viable para comercializar, el mercado del MDL y los esquemas similares del

sector privado resultan una total pérdida de tiempo, cuando el mundo debe hacer frente a una grave crisis climática.

En lo que resulta una contradicción absurda, el Banco Mundial facilita estos falsos enfoques basados en el mercado para abordar el cambio climático, a través de su Fondo Prototipo de Carbono, el Fondo de Bio Carbono y el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, a la vez que promueve, a una escala mucho mayor, que se siga desarrollando la búsqueda, extracción y quema de combustibles fósiles, que en gran parte servirán para asegurar el aumento de las emisiones del norte.

En conclusión, “ponerle precio al carbono” resultará tan efectivo, democrático, o conducente para el bienestar humano como ponerle precio a los genes, los bosques, la biodiversidad o los ríos limpios.

Reafirmamos que las reducciones drásticas en las emisiones derivadas de los combustibles fósiles son un prerrequisito si se quiere evitar la crisis climática. Afirmamos que somos responsables ante las próximas generaciones de buscar soluciones reales, que sean viables y verdaderamente sustentables y que no sacrifiquen a las comunidades marginalizadas.

Por todo esto, nos comprometemos a ayudar a construir un movimiento popular global por la justicia climática, a movilizar a las comunidades en todo el mundo, y a expresar firmemente nuestra solidaridad con todos quienes se oponen al comercio de carbono a nivel local.

**Firmada el 10 de octubre de 2004 por el Grupo Durban por la Justicia Climática
Glenmore Centre, Durban, Sudáfrica**

Otras lecturas de interés:



El Cielo No es el Límite: El mercado emergente de gases efecto inver- nadero

Enero de 2003

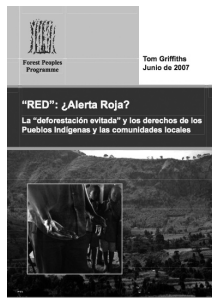
El comercio de emisiones se asienta en el cruce de dos de las más controvertidas líneas del debate político económico:

¿Es el neoliberalismo un motor de prosperidad para todos, o una monopolización de los recursos globales para unos pocos?

¿Está la Organización de las Naciones Unidas atravesando una fatal crisis de legitimidad, o es la última esperanza para la justicia y la paz en el mundo?

‘El Cielo no es el Límite’ pone sobre el escenario el emergente mercado de emisiones y lanzan un interrogante sobre si la gente está siendo engañada en nombre del desarrollo sostenible.

<http://www.carbontrade.org/skycast.pdf>



“RED”: ¿Alerta Roja? La “deforestación evi- tada” y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades lo- cales

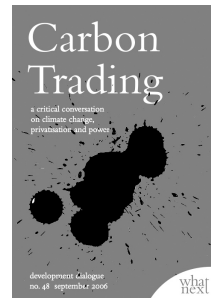
Tom Griffiths
Junio de 2007

Con el fin de ayudar a combatir el cambio climático, están surgiendo nuevas propuestas para políticas mundiales que permitan lograr la “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación” (RED). Este informe del FPP analiza estas propuestas y explica resumidamente la necesidad de un debate urgente en los asuntos sociales y de derechos que corren el riesgo de ser pasados por alto.

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/avoided_deforestation_red_jun07_sp.pdf

Boletín mensual del Mo- vimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM,

<http://www.wrm.org.uy/inicio.html>



Carbon Trading: A criti- cal conversation on cli- mate change, privatiza- tion and power - Comer- cio de emisiones: una conversación crítica so- bre el cambio climático, privatización y poder Larry Lohman October 2006

Esta publicación analiza exhaustivamente el sistema dominante del “comercio de emisiones” adoptado por el Protocolo de Kyoto y el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, argumentando que es ineficaz e injusto.

El libro, publicado por la organización sueca Dag Hammarskjöld Foundation junto con el grupo internacional Durban por la Justicia Climática y la ONG británica The Corner House, sostiene que el comercio de emisiones ralentiza el cambio social y tecnológico necesario para combatir el cambio climático mediante la innecesaria prolongación de la dependencia mundial del petróleo, carbón y gas.

(A pesar de estar actualmente disponible sólo en inglés, la versión en español será próximamente publicada)

http://www.dhf.uu.se/pdfiler/DD2006_48_carbon_trading/carbon_trading_web.pdf